

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 18 minutos)

- La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Hacienda tiene el agrado de recibir en la tarde de hoy a una delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

**SEÑOR CANEL.-** Ante todo, debo decir que esta es una delegación institucional también integrada por las gremiales más vinculadas a la Caja. Estamos presentes tres integrantes de su Directorio y también el Presidente de la Agrupación Universitaria del Uruguay, el Presidente de la Federación Médica del Interior, doctor Italo Mogni, el Presidente de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, doctor Gianero y el doctor Suárez, Secretario General de la Asociación de Funcionarios de ésta, así como el Secretario de la Comisión Asesora de Contralor, órgano único en el sistema de Seguridad Social de nuestro país que, como su nombre lo indica, garantiza la transparencia de la gestión a través del contralor de todas las actividades, y en donde están representadas todas las profesiones amparadas por nuestra Caja.

Agradecemos que finalmente podamos tener la posibilidad de dirigirnos directamente al Senado de la República –y a través de éste, al Parlamento- instancia que venimos esperando desde hace bastante tiempo. Desde la aprobación de la Ley Nº 16.713, los sucesivos Directorios que han pasado por la institución venían esperando con particular ansiedad y preocupación esta instancia. Ya en el año 1997 se constituyó en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios una Comisión interna integrada por miembros del Directorio, asesores en el terreno jurídico y también en el financiero, y delegados de la Comisión Asesora y de Contralor, que en un período de algo más de tres años elaboró un proyecto de revisión total de la Ley Orgánica de la institución. Ese proyecto fue elevado en el año 2000 al Poder Ejecutivo, y a partir de ese momento se inició una etapa de conversaciones y negociaciones con técnicos del Poder Ejecutivo -particularmente, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- y luego distintas instancias políticas. Como resultado de esa negociación quedó el primer Mensaje, que fue enviado en octubre del año pasado, en donde subsistían aún algunas discrepancias entre nuestro proyecto y el enviado por el Poder Ejecutivo.

Ahora bien, sin perjuicio de ello debemos decir, ante todo, que para nuestra satisfacción ya ese Mensaje original del Poder Ejecutivo –que tiene iniciativa en esta materia- recogía básicamente la estructura del proyecto que había sido elaborado por nuestra institución con el consenso, en términos generales, de las gremiales aquí representadas. Básicamente, el proyecto mantiene ciertas líneas generales de la institución: en primer lugar, el sistema de solidaridad intergeneracional, que ha sido explícitamente apoyado por las gremiales universitarias y, en segundo término, el sistema de aportación por ingresos fictos, ya que la experiencia histórica de la institución demostró el fracaso de los aportes por ingresos reales y la enorme dificultad que llevaría a la creación de un gigantesco aparato de fiscalización que no podemos afrontar. Somos una institución chica -por suerte sin burocracia- con algo más de 140 funcionarios, por lo que no podríamos fiscalizar el ingreso de 35.000 profesionales activos, como son los que en este momento están revistando en la Caja, cifra que esperamos se pueda ensanchar, tema al que posteriormente me voy a referir.

En términos generales, el proyecto del Poder Ejecutivo tomó como guía, como lineamiento general, el elevado por la Caja. Ahora bien, subsistieron algunas discrepancias que fueron objeto de una negociación posterior que, a entender del Directorio, llegó a feliz término a través de un acuerdo que quedó plasmado en el Mensaje Complementario enviado hace algunos meses –no recuerdo la fecha exacta- y que hoy día forma parte del proyecto consolidado y a consideración del Senado.

Debemos decir –creo que el símil es pertinente, porque seguramente ustedes vivieron la circunstancia- que nuestra institución se encuentra en este momento en instancias similares a las vividas por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, que más o menos en esta misma fecha del año pasado estaba luchando denodadamente, con el apoyo de la Asociación de Escribanos del Uruguay –que tenemos entendido realizó una comparecencia conjunta como la que estamos haciendo en este momento- a efectos de urgir al Poder Legislativo a una rápida consideración del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, ya que contiene ciertos elementos, en primer lugar, que conforman a los afiliados representados a través de los órganos de la institución y de las gremiales que giran en su entorno, pero además contiene disposiciones que son esenciales para el futuro económico-financiero de nuestra institución.

Más allá de que luego se abra la discusión de algunos puntos en particular, quiero centrarme en dos grandes capítulos que, a nuestro entender, son fundamentales. En primer lugar, el nuevo proyecto de ley equipara, a través de un proceso de transición, el tratamiento del colectivo masculino y del colectivo femenino de la institución. Todos los estudios de proyecciones actuariales nos confirman algo, que si bien intuitivamente puede ser muy claro para todo el mundo, es importante que nos manejeamos cada vez más profesionalmente en este terreno: la importancia capital que tiene la aprobación de esta disposición contenida en el proyecto de ley a estudio del Parlamento y en el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

De no procederse a esta equiparación, más allá de que debemos decir que nos consideramos el instituto de seguridad social más saneado del país, con una mejor relación activo-pasivo, con una buena cartera de inversiones, con una creciente participación del producido de las inversiones para cerrar la brecha que se está produciendo entre los ingresos reales por recaudación y los egresos por prestaciones, la viabilidad de nuestra institución se vería seriamente comprometida. Creo que las razones son muy claras. El colectivo creciente de los profesionales universitarios se ha ido feminizando. Los ingresos a la Universidad de la República, crecientemente son mayoritariamente femeninos y los egresos lo son aún más, ya que este colectivo tiene menor tendencia a la desertión prematura que, lamentablemente tiene el colectivo masculino. Esto lleva a que la actual discriminación favorable hacia el colectivo femenino sea imposible de sostener en el tiempo.

Entonces, creemos que esta es una disposición fundamental que está contenida en el proyecto de ley y que es necesaria una pronta aprobación a efectos de poner en marcha los procesos de transición –ya que no está planteado para que sea de manera

abrupta- y poder mejorar el perfil para lograr el objetivo que nos hemos trazado, de garantizar que quienes hoy estén iniciando su actividad o su carrera profesional tengan la certeza de que dentro de 30 años podrán tener asegurada su pasividad.

Otra disposición que para nosotros es fundamental y que está contenida en el proyecto de ley es la que arbitra el mecanismo para la inclusión de nuevas profesiones. Por una situación que entiendo no fue deseada en su momento, sino por una tendencia, muy nuestra en general, de tratar de hacer listados taxativos en lugar de disposiciones omnicomprendivas, en los orígenes de la institución se estableció un elenco de profesiones universitarias que coincidían con las famosas 12 profesiones mayores y con una concepción mucho más rígida y menos dinámica de la realidad universitaria de la que existe hoy, ya entrado el siglo XXI, cuando no solamente la Universidad de la República ha evolucionado de tal forma que hoy está otorgando cerca de un centenar de títulos y diplomas de diverso tipo, sino que además nos encontramos frente a una realidad universitaria mucho más variada y rica con la incorporación de profesionales provenientes de la Universidad Católica y de otras instituciones reconocidas debidamente por el Estado como instituciones universitarias. En su momento el Parlamento, en el periodo anterior, había aprobado la Ley N° 17.170, que establecía -lo que nos parece razonable y así nos fue planteado en su momento, por lo cual no ha sido utilizado por la Institución- plazos muy acotados para un pronunciamiento ficto para la aceptación de nuevos colectivos por parte del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo conversado y negociado, en el Mensaje complementario se indican disposiciones que establecen la aprobación ficta en un tiempo razonable, que llega a los 360 días -si el Poder Ejecutivo entiende necesario utilizar todo el periodo- para la posibilidad de incorporación de nuevos colectivos.

La incorporación de nuevos colectivos tiene para nosotros dos aspectos importantes. Por un lado, el relativo a los principios. No es razonable ni lógico que la sociedad uruguaya, a través del instituto de seguridad social -pero que tiene sus repercusiones en otros ámbitos, incluso en la propia Administración Pública en la calificación de distintos profesionales- esté estableciendo una diferencia entre profesionales y egresados del mismo instituto, o de otros, pero que tienen el reconocimiento específico del Estado como títulos de grado universitario. Nos parece que desde el punto de vista de los principios universitarios, esto es incorrecto, está mal, es una rémora del pasado que la propia agrupación universitaria del Uruguay superó hace más de 10 años, permitiendo la incorporación de nuevos colectivos en su seno. A su vez, la Universidad de la República se ha ido superando, creando nuevas facultades, títulos, diplomas, profesiones y también ámbitos enteros, como la Facultad de Ciencias, la de Ciencias Sociales o la de Psicología. Lógicamente, reclaman sus derechos, superando incluso concepciones universitarias de otra época, cuando se creía que ciertos ámbitos formaban solamente para la vida académica; sin embargo, hoy la Facultad de Ciencias, en reiteradas ocasiones nos ha planteado que aspira a que sus egresados -un geólogo, un biólogo marino o cualquiera de sus disciplinas- puedan aspirar a formar consultoras, asesorar empresas o institutos del Estado y actuar en el libre ejercicio de la profesión como un ingeniero, un arquitecto o un abogado. Y, por lo tanto, también aspiran -en el terreno de la seguridad social- a tener un amparo similar al de un ingeniero, un arquitecto o un abogado. Esto nos parece, desde el punto de vista de los principios, absolutamente legítimo. Y en cuanto al futuro actuarial, económico y financiero de nuestra institución, es importante que vayamos ensanchando nuestra base de aportación. Quiero recordar a los señores Senadores que estamos hablando de que la Caja de Profesionales Universitarios ampara exclusivamente a los profesionales en el libre ejercicio de sus profesiones; no estamos pretendiendo disputar al Banco de Previsión Social a los colectivos. Sabemos que de estos profesionales no amparados actualmente por la Caja Profesional, la inmensa mayoría está ejerciendo -cuando lo hacen- libremente, fuera de todo ámbito formal o, como me lo ha expresado el Presidente del Banco de Previsión Social, amparándose en disposiciones que les permiten, si tienen ingresos provenientes de una actividad dependiente, estar inscriptos en el Banco de Previsión Social como empresas unipersonales, pero no aportando.

Desde el punto de vista de la cobertura global del sistema general de seguridad social de todo el país, sin lugar a la menor duda, esto va a representar un mejoramiento del perfil de aportación y de recaudación.

La Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios no será perfecta, pero tiene un nivel de gestión y de desburocratización que la ha llevado a poder otorgar jubilaciones sobrias -quizás no sean espléndidas en relación con otras que se sirven en el país- y dignas para los profesionales universitarios. Esto se ha logrado, reitero, a través de una gestión que se ha ido realizando mediante la coparticipación en su Directorio de delegados de los profesionales activos -lo que se propone mantener- de los profesionales jubilados y de delegados designados por el Poder Ejecutivo. Cabe destacar que en la instancia de elaboración de la Ley Orgánica se ha actuado de manera absolutamente unánime en todos los aspectos.

En cuanto a las características de la ley, diría que se mantiene el carácter de institución paraestatal y autónoma, cogestionada en la forma en que mencionaba, y con la doble vertiente de financiación, que es muy importante para nosotros y que el Poder Ejecutivo ha consolidado en este proyecto de ley. El doble componente de financiación consiste, por un lado, en el aporte que hacemos los profesionales universitarios en forma directa -que en un sistema clásico de reparto correspondería al aporte del empleado- y, por otro, el que sustituye al del empleador, que no existe en forma explícita en este caso, pero que sería la sociedad en general que requiere de los servicios profesionales y que consolidaría los aportes indirectos que se expresan a través de una serie de tributos, como los timbres, y el tan mentado por algunos de mis colegas, establecido en el inciso f) del artículo 23, que es un aporte de un 2% sobre las obras de arquitectura, que se recauda conjuntamente con el aporte unificado de la industria de la construcción. Este último aspecto, tan polemizado por parte de la asociación de promotores de la construcción del Uruguay, se propone reducirlo, bajándolo a cuatro tercios por ciento -si no recuerdo mal- pero englobando también a las obras de ingeniería, la mayoría de las cuales, cabe recordar, están exoneradas de todo tributo a la seguridad social cuando son financiadas por aportes de organismos internacionales.

En consecuencia, reitero, el proyecto de ley -y así ha sido recogido por parte del Poder Ejecutivo- reconoce y consolida la doble financiación. Por un lado tenemos, entonces, los aportes directos de los profesionales que, en términos generales -últimamente se han producido algunas alteraciones debido a las turbulencias económico financieras que está viviendo el país- en los últimos años, han representado aproximadamente un 50% de los ingresos de la Institución. Por otra parte, contamos con los aportes indirectos, que representan alrededor de un 25% de los ingresos y, el tercer componente, corresponde al producido de la cartera de inversiones que se ha ido generando y que en su mayor parte está colocada en títulos públicos -porque así lo determina la ley- pero que también ha permitido la incursión en actividades tales como la construcción del edificio de la calle Yaguarón -que es un emprendimiento para financiamiento de la institución a largo plazo- y el emprendimiento de establecimientos forestales en el departamento de Florida -que ya prácticamente se han completado- y recientemente en la zona de Arévalo, departamento de Cerro Largo, de 6.000 hectáreas. Estas últimas actividades, también están contribuyendo a generar fuentes de trabajo y de riqueza para el país. Con esto completamos el 100% de los ingresos. Es interesante señalar que el producido de las inversiones ha ido ganando importancia en los últimos años, mientras que los aportes indirectos han sufrido una notoria declinación, en este año en particular,

ya que debido a la caída de la actividad de la industria de la construcción, se ha registrado una disminución importante de los ingresos por ese concepto.

La propuesta que se ha recogido en el proyecto de ley consiste en distribuir de manera un poco más equitativa los tributos, bajando algunos de ellos y repartiéndolos sobre las actividades vinculadas a todas las profesiones universitarias. Una de las críticas que se podía hacer era que, no sólo por los aspectos históricos de la ley, sino también por el devenir de las distintas instancias, se habían ido retirando algunos de los tributos, sobre todo los que tienen que ver con sectores de actividades agrícolas y veterinarias, que fueron disminuyendo. Por lo tanto, se pasó de una participación de los aportes indirectos del orden del 50% hacia finales de la década de los 80, a alrededor del 25% en los tiempos presentes.

Nos parece importante adelantarnos a señalar que existen –la mayoría de los Legisladores conocen esta situación- algunas discrepancias sobre esta iniciativa. No debe haber colectivo más discutidor que el de los profesionales universitarios y, por lo tanto, han surgido algunas opiniones divergentes de índole menor. La mayoría de las gremiales vinculadas a nuestras actividades se han pronunciado enfáticamente a favor de este proyecto de ley, pero quizás alguno de los integrantes de la delegación aquí presente, plantee matices diferentes.

Queremos referirnos en particular a dos puntos que están contenidos en el proyecto de ley a consideración de la Comisión y que son, sabemos, particularmente discutibles, aunque de alguna forma tienen su razón de ser.

En primer lugar, queremos plantear un tema que ha generado mucha discusión en los ámbitos gremiales universitarios que es el que contempla la situación de aquellos Magistrados que quedaron comprendidos en el período de transición porque tenían más de cuarenta años al aprobarse la Ley N° 16.713 y que –así nos fue planteado- frente a una política de Estado de mejoramiento de sus retribuciones, se verían particularmente perjudicados por los topes actualmente vigentes en el Banco de Previsión Social. Se nos planteó un mecanismo sin costo para la Institución a cargo de Rentas Generales, para atender a un colectivo que no es ajeno a la Caja de Jubilaciones Profesionales –ya que está constituido íntegramente por profesionales abogados- frente a una política consolidada en la que se buscaba, sin alterar los parámetros del Banco de Previsión Social, contemplar una situación particular. Ante esto, el Directorio resolvió formalmente no expedirse –ya que era un tema particularmente delicado y conflictivo y toca algunos aspectos de principios- pero tampoco oponerse a la inclusión de este Capítulo en el proyecto de Ley Orgánica, en la medida en que, lo que fue planteado desde el origen, quedó contemplado en la iniciativa. En definitiva, se tiene en cuenta una actividad que no corresponde estrictamente a la Caja de Profesionales ya que, reitero, la misma ampara exclusivamente a los profesionales en libre ejercicio y, obviamente, los Magistrados están impedidos no solamente en forma legal, sino por disposición constitucional de realizar dicho libre ejercicio, por lo que su actividad la realizan en relación de dependencia. Sin embargo, en la medida en que esto no tiene costo y se está contemplando a un colectivo universitario, no nos oponemos a la inclusión del mismo en el proyecto de ley.

Por otra parte, se ha planteado –sabemos que alguna gremial ha pedido audiencia con esta misma Comisión- algún reparo con respecto a las disposiciones relativas a los funcionarios de la Caja. Con base en un informe muy claro y contundente –que vamos a entregar a la Secretaría de la Comisión- realizado por el doctor Horacio Cassinelli que es el asesor letrado de nuestra institución, el Directorio, por unanimidad, entendió que los artículos referentes al estatus jurídico de nuestros funcionarios de ninguna manera establecen la inamovilidad de los funcionarios. Por supuesto, este puede ser un tema polémico. En este sentido, sabemos que el Colegio de Abogados ha cuestionado esta resolución del Directorio y que posiblemente reitere su planteo.

Por lo tanto, repito que la unanimidad de los integrantes del Directorio –cuyos integrantes reflejamos distintas vertientes, tanto gremiales como de origen, de los afiliados activos, los jubilados y los representantes del Poder Ejecutivo- decidió que el ámbito que rige para los funcionarios de la Caja es el del Derecho Privado, el Derecho Laboral, tal como se establece a texto expreso en el proyecto de ley que está a su consideración.

Es muy importante señalar, como indicaba en un comienzo, que se mantiene el sistema de aportación por fictos. El sistema que está vigente actualmente en nuestra institución establece 10 categorías.

En el proyecto de ley están recogidos, básicamente, los acuerdos y de ninguna manera queremos apartarnos de ellos. Sin embargo, voy a hacer un comentario que proviene de las vivencias y experiencias de este año, que está resultando tan difícil para todo el país y, especialmente, para los profesionales universitarios. La ley vigente y el proyecto de ley –en el que no se hizo ninguna innovación, porque todavía no contábamos con la experiencia recogida este año- mantienen la obligatoriedad de las categorías hasta la cuarta categoría y, concomitantemente, se establece una prestación mínima equivalente a la de la segunda categoría.

Queremos dejar como reflexión algo que no consta en el mensaje, pero que es bueno tener en cuenta. Hemos visto que debido a la crisis económica, a la notoria disminución de las fuentes laborales para muchos profesionales, a la inclusión de una evolución parabólica y no recta de los aportes de las diversas categorías –que hace que crezca mucho el pasaje de primera a segunda y a tercera- y al hecho, además, de que se ha sumado a esto el Impuesto a las Retribuciones Personales que se aplica sobre los fictos y considerando, por último, la reciente resolución que reestructura los fondos de seguridad, bajando su aplicabilidad a los profesionales –en un comienzo era para los profesionales con diez años de antigüedad y ahora alcanza a los graduados con cinco años de antigüedad- se ha generado una situación muy compleja que nos está afectando mucho en las declaraciones de no ejercicio libre de muchos profesionales. Esto ha llevado a ciertos afiliados –quienes tienen una actividad dependiente- a dejar de hacer una doble aportación y a otros a ejercer fuera de los parámetros legales. Por otra parte, las estadísticas indican que las deserciones se dan básicamente en la segunda categoría. Es más, el subsidio por maternidad, que otorga la institución –consolidado en el proyecto de ley de forma explícita, ya que la Caja lo ha estado otorgando como una extensión del subsidio por incapacidad, lo que constituía uno de los tantos anacronismos de la ley vigente- está disminuyendo, pese al gran número de egresados de las Universidades, porque los profesionales de las categorías más bajas declaran el no ejercicio. Lamentablemente, esta realidad ha significado una caída en el número de afiliados, de 35.000 a mediados del año pasado a algo más de 32.000 en la actualidad.

En consecuencia, nos vemos obligados a plantear nuestra preocupación en cuanto a si no sería más lógico disminuir la prestación mínima, bajando a la mitad de lo previsto, eliminando la obligatoriedad de llegar hasta la cuarta categoría y estableciendo que sea hasta la segunda, a efectos de que resulte más asequible para los profesionales jóvenes, sobre todo cuando deban cumplir con el Impuesto a las Retribuciones Personales y con los aportes a los diversos fondos que se han creado, lo que en ciertas categorías

representa cerca del 40% de sus aportes, como Aporte Unificado en la Caja Profesional. Reitero que esto constituye una situación muy compleja para la institución, puesto que si bien nos parece muy loable contribuir con un fondo que está destinado a otorgar becas a estudiantes de bajos recursos y democratizar así el ingreso a la Universidad, y también es bueno que quienes hemos tenido la posibilidad de realizar nuestra carrera universitaria con el financiamiento de la sociedad uruguaya colaboremos con esa Casa de estudios, el hecho de que nosotros seamos la ventanilla recaudadora nos está trayendo grandes dificultades y repercusiones quizás no pensadas en un momento en que se aprobaron estas disposiciones sobre la seguridad social. En general, los profesionales no discriminan y, cuando deben hacerlo, como lo que pueden evitar pagar es el Montepío, no lo abonan, salvo que se encuentren atrapados, como es el caso de los ingenieros agrónomos o los veterinarios que son propietarios de establecimientos rurales que no pueden hacer declaraciones de no ejercicio porque tienen el número de DICOSE y se ven en medio de una trampa mortal –en algunos casos- que les provocan deudas enormes e impagables, por la aplicación del Código Tributario, que es el que rige para las deudas que se generan en nuestra institución.

En términos generales, estas son las grandes líneas del proyecto de ley que está a consideración de la Comisión. Si el señor Presidente lo creyera oportuno, agradeceríamos que se permitiera la intervención de otros integrantes de las gremiales y de la Comisión Asesora, que se encuentran presentes.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Considero conveniente que primero escuchemos la opinión no ya de los representantes de la Caja de Profesionales Universitarios sino de los delegados de todas las entidades que nos visitan en esta ocasión para que luego hagan uso de la palabra los señores Senadores que ya se han anotado, porque lo más importante es, precisamente, el intercambio de ideas y que nuestros visitantes nos puedan aportar alguna información sobre los temas en cuestión.

**SEÑOR LLANERO.-** Nosotros habíamos solicitado una audiencia a la Comisión, pero el Presidente de la Caja nos comentó que podíamos concurrir hoy, lo que hacemos con mucho gusto. Si el señor Presidente considera que la agenda del día de hoy es muy apretada, solicitaría que se nos concediera la audiencia que hemos solicitado. El tema del que quiero hablar no es muy sencillo, porque tengo que referirme a ese capítulo relativo a los magistrados, que nos parece insólito.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Entonces, sugiero que haga una presentación muy breve del tema, porque hay varios señores Senadores que desean efectuar preguntas al respecto y, si corresponde, más adelante podríamos concretar esa audiencia que nos han solicitado.

**SEÑOR LLANERO.-** Gracias, señor Presidente.

La Asociación cuenta con personería jurídica desde 1961 y actualmente tiene 1.500 afiliados.

Nosotros también apoyamos el proyecto; además, debo decir que esta historia la vivimos desde 1985, al final de la dictadura, momento en que la Ley Nº 15.800 habilitó a que las tres Cajas Paraestatales presentaran proyectos en este sentido. Nosotros lo hicimos en 1987, y en 1993 el entonces Presidente de la República, doctor Lacalle, pidió que ese proyecto se actualizara. Procedimos en tal sentido, volvimos a trabajar en ello, pero esas dos iniciativas jamás llegaron al Parlamento. Por eso estamos satisfechos de que ahora sí esta iniciativa haya llegado a este ámbito.

No voy a corregir al Presidente, el arquitecto Canel, con respecto a la decisión del Directorio –que yo no integro- pero la doctora Beatriz Rovira, que es delegada de los jubilados en el Directorio, escribió en el boletín de la Asociación lo que sucedió en la sesión del 18 de abril, cuando ese Directorio aprobó hasta el artículo 146 del anteproyecto del Poder Ejecutivo y luego agrega la moción –creo que es textual-: "dejando claramente establecido en su segunda parte votada por seis miembros que los artículos 146 a 150 del proyecto constitutivo de un capítulo especial referido a magistrados judiciales y otros funcionarios que se encuentran en determinadas condiciones provienen de una iniciativa del Poder Ejecutivo que no condice con la esencia del sistema de seguridad social de los profesionales universitarios que corresponde a nuestra Caja desde su creación en 1954. Por lo mismo, dicha inclusión en un colectivo constituido por profesionales en ejercicio libre de su profesión resulta un apartamiento del ámbito de aplicación de las normas propias de este Instituto".

Esto cada uno puede interpretarlo a su modo, pero confieso que pensaba que el Directorio no coincidía con la inclusión de esos artículos.

Esta es una situación única en el país, referida a personas que se van a jubilar por un solo trabajo y que van a contar con dos jubilaciones.

Pienso que esta imposición que pretende hacer el Poder Ejecutivo tiene como finalidad solucionar el tema de los topes jubilatorios. Estamos de acuerdo en que es una injusticia gravísima el hecho de que la gente aporte por determinados salarios –por suerte hay personas que ganan muy bien en este país- pero que al momento de percibir una jubilación se encuentre con que ha sido retaceada.

En el caso de los magistrados, se dice que tienen una imposibilidad constitucional de ejercer la profesión; y es cierto. Sin embargo, conozco el caso de dirigentes políticos profesionales que no pueden ejercer porque dedican toda su actividad a la política, así como el de gerentes –que ganan muy buenos sueldos y que se dedican por entero a sus empresas- que también son profesionales universitarios, así como el caso de algunos militares que son similares. Toda esa gente está en la misma situación: los jueces porque la Constitución se los prohíbe y otros profesionales porque se dedican a otras tareas, donde ganan muy bien y pueden pagar al Banco de Previsión Social, pero después no los jubilan.

Por lo tanto, entendemos que con esta inclusión se genera una carrera ficticia, porque se les otorgan derechos como si hubieran ejercido libremente la profesión de abogados durante todo el tiempo que, por principio constitucional, lo tuvieron expresamente prohibido y, además, como si hubieran efectuado aportes a la Caja Profesional.

Si realmente se quiere solucionar la injusticia que representa el cobro de pasividades muy reducidas en relación a los aportes efectuados, el Poder Ejecutivo y el Parlamento pueden liberar los actuales topes jubilatorios o, de lo contrario, posibilitar que se transite en la discriminación que se hace en el artículo 72 con respecto a que los cargos de Presidente de la República no están

atados a esos toques. Personalmente, debo decir que, por supuesto, no estoy de acuerdo con esta discriminación, pero ya que se comete un apartamiento de lo que es razonable, pienso que esto también se puede hacer con los magistrados.

El proyecto establece que la pasividad resultante será de cargo de Rentas Generales, pero primero va a tener que pagar la Caja y después, cuando se viertan los tributos que esa Caja cobra, ahí se va a compensar el gasto. No quiero pensar qué pasaría si algún día se derogan los impuestos que actualmente cobra la Caja, ni cómo se la va a resarcir de los pagos efectuados.

Brevemente también tenemos que referirnos a otro aspecto, que es el relativo al artículo 77 del proyecto, que hace incompatible la jubilación por edad avanzada con cualquier otra jubilación. Esto se sacó del artículo 19 de la Ley N° 16.713. Al respecto, me parece importante resaltar que una cosa distinta es la situación de los afiliados al Banco de Previsión Social, donde la mayoría empieza a aportar a los 18 ó 20 años y que necesita 30 ó 40 años para llegar a los 60. Pero es muy común que los universitarios egresen de su Facultad a edades bastante avanzadas. Una persona que trabaja desde muy joven demora mucho sus estudios y es posible que se reciba a los 40 ó 45 años; todos conocemos algún caso. Se supone que esa gente va a tener una jubilación por el Banco de Previsión Social –porque ha trabajado, repito, desde muy joven- va a afiliarse a la Caja y no se va a poder jubilar por ésta, porque si tiene otra jubilación del Banco de Previsión Social, se hace incompatible con la jubilación por edad avanzada. Para esto tendría que tener 30 años de ejercicio de la profesión, a partir de los 40 ó 45 años de edad. Es decir que la situación del Banco de Previsión Social es totalmente distinta a la de la Caja.

Por otro lado, hay un artículo –el 143- que trató de alguna forma de compensar esto y estableció que los que ya tienen una jubilación concedida por el Banco de Previsión Social y han configurado causal para la jubilación por edad avanzada –es decir, los 10 años actualmente o los 15 años después- se van a poder jubilar, pero deja afuera esa posibilidad para el futuro. Esto no lo vemos sólo como un perjuicio para los profesionales, sino también para la propia Caja, porque va a haber un montón de profesionales egresados mayores que no se van a afiliar a la Caja, siendo muy posible que igualmente trabajen.

Otro aspecto importante es que la Caja de Profesionales Universitarios actualmente paga a los jubilados y pensionistas una pequeña cantidad para cubrir la cuota mutual. Con esta ley, este pago cesará para las futuras pensiones. Como los señores Senadores saben, cuando fallece el marido o el jefe de familia, el presupuesto de la casa no se reduce mucho porque, por ejemplo, si son propietarios, deben pagar igualmente la contribución inmobiliaria y otros gastos. Además, el pago del aporte jubilatorio lo vemos, al fin y al cabo, como un bien ganancial, porque es algo que el matrimonio saca de su presupuesto para pagar a la Caja. Entonces, estamos en contra de que se elimine ese beneficio.

Para terminar, quiero decir que el artículo 9° del proyecto establece que el Estado no asume responsabilidad pecuniaria vinculada con la subsistencia de la Caja. En nuestra humilde opinión, este artículo se contrapone con el artículo 67 de la Constitución. No creemos que la Caja vaya a necesitar jamás asistencia financiera del Estado, pero para el caso de que la necesite, acá se establece que el Estado no asume ninguna obligación. Al respecto, hemos consultado al catedrático José Aníbal Cagnoni–colega del doctor Correa Freitas- quien nos ha dado su opinión terminante acerca de que ese artículo es inconstitucional. Si bien no creemos, insisto, que la Caja llegue a necesitar nunca asistencia financiera, pensamos que no corresponde aprobar una ley que incluye una inconstitucionalidad.

De todos modos, les hacemos entrega de un material escrito que abunda un poco más en estos temas.

Muchas gracias.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Agradecemos el material; incluso, tal vez tengamos que tomar nuevamente contacto con nuestros visitantes, que ya nos han solicitado una audiencia en tiempo y forma.

**SEÑOR SUAREZ.-** Quiero agradecer esta oportunidad en mi calidad de Secretario de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Profesionales Universitarios. Debo decir que hemos venido por una invitación del Presidente de la Caja y que aquí están representadas todas las gremiales profesionales que fueron electas de la misma forma en que lo fue el Directorio de la Caja, es decir, por el voto de todos los afiliados activos y jubilados de la Caja.

Nosotros venimos porque representamos, junto con el Directorio, a la Caja en sí, y además porque la Comisión Asesora, durante todo este tiempo de trabajo que ha llevado el proyecto de Ley Orgánica, ha estado haciendo el estudio pertinente, llegando a este punto en que estamos en una concordancia prácticamente total con el trabajo efectuado por el Directorio. No obstante eso, la Comisión Asesora, que también pidió ser recibida en su momento, tiene ciertos puntos en los que no está de acuerdo –algunos ya fueron citados- y que si bien no hacen al total de la Ley Orgánica ni a su esencia, consideramos que pueden ser modificados. Pensamos que no es este el momento para entrar a ver cada uno de esos puntos, por lo que vamos a entregarles un memorándum para que quede a estudio de los señores Senadores. Si esta Comisión entiende necesario entrevistar a la Comisión Asesora para conversar sobre esos aspectos, estamos a las órdenes para concurrir en cualquier momento.

Nada más. Muchas gracias.

**SEÑOR FARCILLI.-** Represento a la Asociación de Funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios, que en términos generales apoya el proyecto de ley.

Como dijo el señor Presidente, creemos que se va a fortalecer un instituto de seguridad social, que además constituye nuestro trabajo, y que busca mantenerse dentro de la línea de un régimen solidario de seguridad social que como trabajadores entendemos es el que se acerca a la pretensión de seguridad social que tienen todos los trabajadores.

En segundo lugar, debemos señalar que felizmente este proyecto de ley nos incorpora en el único colectivo de los profesionales universitarios, pues somos los únicos funcionarios de todas las Cajas Paraestatales que nos jubilamos por el Banco de Previsión Social y no por la Caja en la que trabaja.

En síntesis, queremos expresar nuestro apoyo a este proyecto de ley que desde hace aproximadamente cuatro años está en discusión y que nos tiene bastante contentos, por lo que nos gustaría que se aprobara lo más rápido posible.

No obstante ese apoyo general, así como manifestaron los dos participantes que me antecedieron en el uso de la palabra, debo señalar que la Asociación tiene algunos puntos sobre los que ya se habló con algún señor Legislador en particular, porque hemos visto que entre el anteproyecto original de la Caja y el proyecto resultante se modificaron algunas cosas que van en perjuicio de los funcionarios, variaciones a las que no encontramos demasiado fundamento.

Después, advertimos que a los funcionarios se les exigen cinco años más de aportación para generar causal, es decir 35 años en lugar de 30. Los funcionarios hacemos aportes por nuestras remuneraciones reales, si bien el régimen general es ficto, pero a pesar de ese mayor aporte que vamos a hacer en general a casi todos los funcionarios, reitero, se le exigen cinco años más de aporte. Esto trae otros rebotes más adelante en el proyecto de ley cuando se refiere a cómo se calcula el porcentaje. Por ejemplo, es distinto el caso de una persona que parte con treinta años de aporte, a la que se le empieza a mejorar el porcentaje jubilatorio, que el de una a la que se le exige aportar treinta y cinco años.

También fue modificado el proyecto de ley original en el cálculo del sueldo básico jubilatorio, que para todos los profesionales se mantiene como hasta ahora en tres años, mientras a los funcionarios, pese a estar comprendidos en la misma Caja, se les hace una discriminación planteando diez años de aporte. Si formamos parte de un mismo colectivo, no entendemos la modificación que efectuó el Poder Ejecutivo al anteproyecto original.

Como tercer punto de discrepancia con el proyecto de ley –repito que son puntos que no afectan en nada al fortalecimiento de la institución, que es un poco la esencia de la ley- debemos mencionar que en el artículo 40 se habla de un período de carencia de cinco años en el cual ningún funcionario se podrá jubilar, efectuando aportes a la Caja. De por sí esto era un poco excesivo, pues había estudios según los cuales, con dos o tres años, era viable el colectivo de funcionarios. De todas maneras, si se dejan esos cinco años –en su momento no lo discutimos, pero simplemente deseo recordar a los señores Senadores que este proyecto de ley se está analizando desde hace aproximadamente dos años- a muchos compañeros que están acercándose a la edad jubilatoria, en realidad les significarían siete u ocho años en el supuesto caso de que este proyecto entre en vigencia, por ejemplo, el 1º de julio de 2003, como una fecha posible. Se trata de un proyecto que se presentó en el año 2000 y que estaría extendiendo al 2008 la posibilidad de jubilarse de algunos funcionarios. Por lo tanto, en nombre de la Asociación solicitamos a los señores Legisladores que tengan en cuenta este período de carencia, y en especial estos dos años en los cuales no se ha aprobado el proyecto de ley, porque se estaría dilatando mucho la posibilidad de muchos compañeros que están esperando con ansias que el mismo sea aprobado, reitero, para poder jubilarse por el Instituto.

Es cuanto quería manifestar.

**SEÑOR ARRUTI.-** Soy Presidente de la Agrupación Universitaria y quiero expresar que en una entidad como la nuestra, que es de segundo grado y que está integrada por más de veinte gremios universitarios, es natural que alguno discrepe con determinados artículos. Es muy difícil lograr unanimidad o consenso en la totalidad de un articulado como el del anteproyecto de ley que estamos tratando. Sabemos que algunos de los miembros que integran la Agrupación Universitaria han solicitado audiencia, y quizá sean recibidos por esta Comisión para hacer sus planteos.

El segundo punto que quiero destacar -ya lo planteó el señor Presidente de la Institución- tiene que ver con la necesidad, no de ahora sino de hace tiempo, de una nueva Ley Orgánica que fortalezca la Caja.

La segunda coincidencia, en la que tenemos unanimidad de opiniones, refiere a que en el futuro la Caja no puede estar limitada solamente a las catorce profesiones universitarias, como lo establece la Ley actual. La realidad del país de 1961 era totalmente distinta a la de hoy, en que tenemos más de noventa profesiones universitarias. Entendemos que en el futuro muchas podrán y deberán integrar nuestro Instituto de previsión social.

Era cuanto quería manifestar.

**SEÑOR MOGNI.-** Soy representante de la Federación Médica del Interior.

Simplemente, quiero expresar nuestro apoyo a este proyecto de ley, sin perjuicio de que nos preocupa el hecho de que hay muchas profesiones universitarias que hoy están excluidas de este servicio. Pero en líneas generales y en nombre del gremio médico del interior, queremos dar nuestro apoyo a esta iniciativa.

**SEÑOR SANABRIA.-** Deseo manifestar que en lo que hace al proyecto de ley que estamos considerando, creo que, en líneas generales, estamos todos de acuerdo y aspiramos a que se convierta en ley antes de fin de año.

Quiero dejar una constancia y formular una pregunta. La primera está referida a los Magistrados y a los funcionarios judiciales. Nosotros hemos trabajado en el tema y, junto con el ex Senador Atchugarry, en su momento tomamos iniciativa dentro del marco de fortalecimiento del Poder Judicial, amparados fundamentalmente en la causal –que continúa vigente- de que aquel profesional que trabaja, pero no ejerce, pueda pagar la Caja y jubilarse. Entonces, amparados en ese concepto y sin costo alguno para la Caja, creímos encontrar una salida a una situación muy injusta.

También recorrimos el camino de análisis de los topes, pero todos sabemos que se trata de un camino de difícil recorrido en estas circunstancias, dado el arrastre de necesidades y las injusticias que se están cometiendo. Sin embargo, el país se encuentra dentro de un marco financiero y económico que nos hace innovar -aunque no siempre con el acierto que sentimos y que necesitamos- tratando de amparar a alrededor de 700 personas, sin costo para la Caja, más allá de que no hubo pronunciamiento ni oposición. Creo que esto es bienvenido, porque dentro de un marco de acuerdo general, evidentemente siempre se deja algo por el camino de ambos lados. Considero que el fortalecimiento del Poder Judicial también pasa por todas estas cosas, por cuanto este Poder independiente debe dar señales claras en este aspecto. Cabe aclarar que estamos frente a escenarios en los cuales un Ministro, cuando culmina su carrera, llega a cobrar un 25% de su salario cuando se jubila. Entonces, si esto no tuviera costo para la Caja, el Estado en esta instancia se haría cargo de la prestación. Aspiramos que en el futuro se haga cargo también del aporte porque, en definitiva, es lo que correspondería, pero debemos ser conscientes de que no encontramos eco favorable en las propias finanzas del Estado para recorrer ese camino, que sería más lógico y justo para todos. Lo que estamos planteando no es el aporte, porque no tenemos posibilidades de lograrlo, sino la prestación sin costo, porque es menos oneroso en virtud de que el horizonte de

jubilaciones en los próximos diez años va a ser mínimo y, seguramente, en el tránsito podremos mejorar aún más y con mayor justicia esta circunstancia.

Por otro lado, quería plantear el tema vinculado a la última apreciación que se hacía y que está en nuestra preocupación. Concretamente, me refiero al rubro de los Psicólogos. En este sentido, me gustaría conocer qué opinión tienen los representantes de la Caja, pues creo que existe un desamparo de dichos profesionales. Tal vez no sea este el momento de considerar este punto, pero quería dejar esta constancia de ese y otros casos de profesiones que están encuadradas dentro de ese nuevo colectivo, en este caso, uno de los más importantes y vinculantes a la actividad profesional.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** La Mesa considera que sería conveniente formular todas las preguntas para luego ceder el uso de la palabra al arquitecto Canel a fin de que las conteste en el momento o nos haga llegar las respuestas por escrito y, de esa forma, culminar por el día de hoy. Si la Comisión lo considera necesario, volveríamos a convocar a nuestros invitados para una nueva sesión.

**SEÑOR HEBER.-** Después de varias intervenciones –porque no las pude escuchar todas- me interesaba formular dos preguntas como para hacerme una composición de lugar. El representante de los funcionarios manifestaba que se alegraba de su inclusión en este proyecto de ley. Me gustaría saber cuántos funcionarios tiene la Caja de Profesionales y cuál es el régimen que tienen hoy por hoy.

**SEÑOR BRAUSE.-** Sin perjuicio, naturalmente, de ingresar con mayor profundidad en otra oportunidad, atento a la importancia y trascendencia del proyecto de ley que hoy nos ocupa, veo con satisfacción que se ha generado un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Caja de Profesionales, de manera tal que, a través de las modificaciones, estamos analizando un proyecto de ley que confiamos todos poder aprobar –al menos en el Senado de la República- en el correr del presente año y así dar solución a un tema gravitante en lo que concierne al universo de afiliados a la Caja.

Quiero formular tres preguntas. La primera de ellas tiene relación con lo expresado por el señor Presidente de la Caja cuando manifestaba cuáles eran las fuentes de recursos. Concretamente, me gustaría saber a cuánto asciende la recaudación de cada una de esas fuentes de recursos, a los efectos de tener un panorama bien claro respecto a los ingresos de la Caja.

La segunda interrogante está vinculada con un aspecto puntual de su exposición, que hace a aquellos profesionales que no aportan porque formulan la declaración de no ejercicio. Habiendo leído el proyecto de ley, advierto que –inclusive ello se mantiene en las modificaciones posteriores elevadas por el Poder Ejecutivo- en el inciso segundo del artículo 43, esa declaración ahora pasa a no tener validez. Esto es así por cuanto se considera que un profesional ejerce su profesión en forma libre no sólo cuando realiza actos concretos, sino cuanto está en disponibilidad de realizarlos. Esa es mi interpretación y agradezco que me aclaren si ello es así y si efectivamente la declaración de no ejercicio no tendría más vigencia.

La otra pregunta tiene relación también con un aspecto ya mencionado y que creo es muy importante, si bien no refiere a este proyecto de ley, pero sí a los adeudos que mantienen algunos profesionales respecto de los aportes que deben realizar a la Caja de Profesionales. Además, me gustaría saber si se considera que es importante y necesario –a los efectos de facilitar una solución a este problema, del que sin duda nos hacemos cargo por cuanto se inscribe dentro de los problemas generales que atraviesa el país en materia económica- incorporar, ya sea en este proyecto de ley o en otra iniciativa, facilidades de pago de dichos adeudos porque, de lo contrario, quedaríamos constreñidos por el Código Tributario. Me imagino que dicho texto –y ello está demostrado- hoy en día no constituye un instrumento hábil para poder solucionar esos adeudos de los profesionales.

En líneas generales, esas eran las preguntas que quería formular al Presidente del Directorio de la Caja.

Por último, y complementando la pregunta que formulara el señor Senador Sanabria en cuanto a profesiones que no están incorporadas, quisiera saber si, a criterio de la Caja, hay otras profesiones que también aspiran a estarlo y cuáles son.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** La Presidencia desea dejar constancia de que quizá haya que estudiar más el tema de los topes, particularmente de los Magistrados, para ver si podemos encontrar una solución técnicamente más prolija, aunque esa será una discusión que tendrá que procesar la Comisión.

**SEÑOR FARCILLI.-** La pregunta que ha planteado el señor Senador Heber podría ser contestada por cualquiera de los integrantes de la administración o por algún Director.

No tengo el dato preciso sobre la cantidad de funcionarios pero ronda en el orden de 150 personas.

**SEÑOR HEBER.-** Lo que queremos saber es la situación en cuanto a aportes a la previsión social, si se entiende que también son funcionarios aquellos que trabajan en la forestación y, por lo tanto, están contemplados en el artículo.

En fin, lo que pregunto es hasta dónde va el concepto de funcionario. ¿Lo son sólo aquellos que revistan dentro de la Caja, que por ejemplo realizan tareas administrativas? ¿Esos 150 desarrollan tareas en la Caja o hay otro tipo de funcionarios, de pronto, contratados?

**SEÑOR FARCILLI.-** Me parece más adecuado que la pregunta sea contestada por el Gerente General, que tiene datos más precisos de la administración.

**SEÑOR DELGADO.-** La Caja cuenta con 147 funcionarios, que somos los que integramos la plantilla del instituto y que aportamos al Banco de Previsión Social. No están incluidas aquí algunas personas que realizan tareas específicamente contratadas en la parte de forestación.

Lo que se prevé expresamente en el proyecto de Ley Orgánica es que los funcionarios administrativos son los que pasarían a depender directamente de la institución y no aquellos que estén en la parte de inversiones, que continuarían en el régimen que los ampara hoy en día.

**SEÑOR CANEL.-** Tengo particular interés en responder la pregunta de los señores Senadores Sanabria y Brause porque, como había expresado en mi intervención inicial, la Caja y las gremiales que están en su entorno están particularmente interesadas en el ingreso de las profesiones no amparadas. Como decía, la realidad universitaria se ha enriquecido enormemente. Actualmente, tanto la Universidad de la República como la Universidad Católica y otras instituciones recientemente reconocidas ofrecen un abanico de profesiones de grado universitario muy amplio. Diría que en todos los contactos que hemos tenido con las distintas Facultades de la Universidad de la República y con el Consejo de Rectores de las universidades privadas –particularmente, en su momento con el doctor Mendizábal, Rector de la Universidad Católica- advertimos un gran interés en que sus egresados puedan tener el amparo de nuestra Caja.

Reitero lo dicho al principio: esto no solamente apunta a la búsqueda del amparo puramente desde el punto de vista de la Seguridad Social, sino que también tiene connotaciones desde el punto de vista social y del reconocimiento de las profesiones universitarias. Obviamente, el caso de los psicólogos es paradigmático; ya no se puede decir que es una nueva profesión, puesto que tiene varias décadas, ya está consolidada y ha sido reglamentada dentro de este período de Gobierno. Se trata de una profesión universitaria controlada por el Ministerio de Salud Pública y que tiene todos los atributos de las restantes. Pero aunque haya colectivos más pequeños como, por ejemplo, los geólogos, los biólogos y otro tipo de profesiones, todos los licenciados de la Facultad de Ciencias y de la de Ciencias Sociales aspiran a tener este mismo reconocimiento. Para nosotros es, pues, una cuestión de principios; el actual Directorio lo ha tomado así. Está establecido el mecanismo por el cual se puede proceder al ingreso de estos nuevos colectivos de la siguiente manera: mediante resolución del Directorio, con la anuencia de la Comisión Asesora y de Contralor, representada aquí por el doctor Suárez, y mediante una aprobación, que puede ser explícita, o tácita pasados 360 días, por parte del Poder Ejecutivo. Así se puede proceder a la incorporación de nuevos colectivos profesionales. En realidad, ya está consagrado un mecanismo parecido, pero en donde el período de aprobación tácita por el Poder Ejecutivo se reducía a 45 días. Como en su momento nos dijera el entonces Senador Atchugarry, en 45 días el expediente no pasaba de Mesa de Entrada, y a pesar de que ese proyecto había sido impulsado por él mismo, se entendió que ese era un período excesivamente escaso para poder estudiar seriamente estos mecanismos. Por ello convinimos que era más razonable establecer un período de 360 días, lo cual no impide que el Poder Ejecutivo pueda hacer un pronunciamiento explícito con un colectivo como el de psicólogos o algún otro, reduciendo ese plazo, que es una aspiración que tenemos, naturalmente, fundamentando bien su ingreso.

Esto en cuanto a la pregunta planteada por los señores Senadores Sanabria y Brause. Puesto que la interrogante del señor Senador Heber ya ha sido respondida, con respecto a la fuente de recursos voy a pedir al contador Delgado que la conteste, sobre todo en lo que refiere a la cuantificación.

Por otro lado, el señor Senador Brause se refería a las declaraciones de no ejercicio. Efectivamente, el concepto que ha mantenido –y sigue manteniendo- la Caja es que aquel profesional, por ejemplo, un arquitecto que tenga montado un estudio, no solamente aporte en el momento en que firma un permiso de construcción o cuando está realizando un proyecto. Con ese criterio es que se realiza la fiscalización. Sin embargo, es pertinente que la declaración de no ejercicio mantenga en la medida en que hay un porcentaje –que históricamente tiende a ser creciente- de profesionales que legítimamente no ejercen su profesión. Cuando realicen su actividad en su campo específico de formación universitaria en relación de dependencia, no sería lógico desde el punto de vista de los principios de Seguridad Social obligarlos a tributar. Hay colegas míos que trabajan en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Banco Hipotecario del Uruguay o en las Intendencias y solamente realizan su actividad en esos ámbitos. Por lo tanto, en la medida en que no ejerzan o no estén ofreciendo sus servicios profesionales, no sería lógico, repito, que deban tributar. Por supuesto que mucho nos gustaría que todos tributaran, pero repito que parece de justicia elemental lo contrario.

El señor Senador Brause hizo alusión a un tema delicado y es el referido al de las deudas y de la aplicación del Código Tributario. Nosotros hemos elevado un proyecto de ley de refinanciación de adeudos el cual en estos momentos está en la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos hablado con el señor Ministro y nos ha expresado que esto está en suspenso, en virtud de que esa Cartera, en este momento tiene otras urgencias, pero no habría cuestionamientos. Le voy a dejar al señor Presidente una copia de este proyecto de ley el cual tuvo el aval del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que es nuestro vínculo con el Poder Ejecutivo y que no tiene costos para el Estado, pero sí la característica de los que se han aprobado para el Banco de Previsión Social, es decir, por ejemplo, con un determinado período. El problema en estos casos es que no podemos ser –para decirlo de una manera cruda- ni los más caros ni los más baratos; no podemos castigar a los profesionales con tasas que sean peores que el Código Tributario, pero tampoco podemos generar una situación tal que la conducta del profesional termine siendo esperar la refinanciación y no hacer los aportes, es decir, generar una deuda y esperar la refinanciación. En ese caso, por el momento, creemos que es mejor seguir funcionando con los parámetros que se han venido utilizando y con alguna flexibilidad acotada incluida en el proyecto, a los efectos de mantenernos dentro de un equilibrio razonable dentro del contexto general.

Creo que es notorio que hay algunos puntos de discrepancias, sobre todo en los temas que no son medulares del proyecto de ley, pero sí quisiera señalar una total coincidencia con lo planteado por el doctor Gianero –sobre esto hemos conversado con el doctor Atchugarry en profundidad, quien manifestó su acuerdo y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo en su momento enviara un proyecto de ley en tal sentido- en cuanto a la injusticia que implica la incompatibilidad de la prestación por edad avanzada con cualquier otra prestación del sistema. Es un punto en el cual estamos haciendo confianza -y por eso no hacemos cuestión con respecto al artículo- en el planteamiento que nos hizo el doctor Atchugarry en el sentido de que esto también podría afectar a otros colectivos que se encuentran en situaciones similares a las nuestras, por ejemplo el de los militares que pueden tener un retiro relativamente temprano e iniciar una actividad en industria y comercio, donde se verían alcanzados por disposiciones similares y, por lo tanto, perjudicados. Si así fuera los aportes realizados después del retiro militar se los llevaría el viento. Aparentemente existe el consenso político de que se envíe un proyecto de ley que resuelva este asunto. Por eso no hemos hecho cuestión pero compartimos lo expresado por el doctor Gianero en ese sentido.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Agradecemos la presencia de nuestros invitados, aunque nos consta que hay algunos temas vinculados a números que no fueron tratados. Sin embargo, tenemos problemas de horarios ya que hay otras delegaciones que esperan para ingresar a la Comisión. Entonces, si para ustedes no es molestia, les pediríamos que nos remitieran esa información –que es más complicada- por escrito, dando por terminada esta primera instancia, sin perjuicio de volver a recibirlos en otro momento.

(Se retiran de Sala los representantes de delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios)



(Ingresa a Sala los representantes del Colegio de Abogados, del Sindicato Médico del Uruguay y de la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay)

**SEÑOR PRESIDENTE.-** La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda del Senado, tiene el gusto de recibir a las delegaciones del Colegio de Abogados, de la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay y del Sindicato Médico del Uruguay.

Les pedimos disculpas por la demora, pero la reunión con la delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se prolongó más de lo previsto e, incluso, tuvimos que dejar planteos pendientes. Además, algunos señores Senadores continúan fuera de Sala conversando con la delegación, a pesar de lo cual, pensamos que es mejor continuar avanzando en el trabajo ya que contamos con versión taquigráfica, por lo que los Legisladores que se vayan reintegrando a la Comisión, podrán tomar conocimiento de lo que ustedes expresen en este momento.

Le damos la palabra al señor Presidente del Colegio de Abogados, doctor Herbert.

**SEÑOR HERBERT.-** El Colegio de Abogados del Uruguay respalda, en general, el proyecto de ley, pero tiene tres o cuatro puntualizaciones que efectuar que nos parecen de principio. A tales efectos hemos traído un memorándum que puede repartirse entre los señores Senadores.

En primer lugar, queremos plantear un tema que tiene que ver con las atribuciones de la Comisión Asesora y del Directorio de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios. El Colegio de Abogados del Uruguay –y varios Colegios- ha insistido en que las inversiones que hace la Caja, que se determinan una vez cada tres o cuatro años –no son trámites de todos los días- tienen que contar con el visto bueno, aún tácito, de la Comisión Asesora. Recordemos que ésta es el único órgano en el que están representadas todas las profesiones.

Se ha manejado el criterio de que el Directorio no puede estar acotado en sus decisiones de inversión por la Comisión Asesora, porque algunas de ellas requieren cierta celeridad y hasta discreción. Sin embargo, sostenemos que en materia de administración de fondos previsionales no debe haber este tipo de reservas, secreto o celeridad. Una vez cada cuatro años, la aprobación puede ser, reitero, incluso ficta. Es la única manera de asegurar que las inversiones sean aprobadas –por lo menos tácitamente- por todos los profesionales universitarios. Les recuerdo a los señores Senadores las dos últimas inversiones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios: la de la Torre de los Profesionales, que aún está ahí parada y que contó con el voto negativo de la Comisión Asesora y la compra de unos campos en Arévalo, en el departamento de Cerro Largo, para forestación –que ahora ya no valen lo que se pagó por ellos- que también se realizó contra la opinión de la Comisión y que no se sabe, hasta el momento, cómo se van a utilizar, a tal punto que recién este año se pidieron precios a consultorías para el proyecto.

En consecuencia, para nosotros este es un tema muy importante, porque hace directamente a la administración de los fondos previsionales.

El segundo tema tiene que ver con los empleados de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios. Al respecto, en el proyecto de ley existe una contradicción fácilmente visible: por un lado, se dice que los funcionarios quedan comprendidos en el régimen laboral común, y en el artículo siguiente se expresa que no pueden ser destituidos sino por omisión, ineptitud o delito. Entonces, se les otorga un status quasi de inamovilidad, a contrapelo de las evoluciones actuales del derecho laboral. Pero además, esto se hace en una Institución que debe cuidar mucho el porcentaje de gastos que utiliza en su administración. Si por alguna de esas casualidades, en el futuro la Caja llega a determinar que está excedida en sus funcionarios porque se está sobrepasando el porcentaje que debe dedicar a la administración y decide, por ejemplo, despedir al 20% o al 30%, no lo puede hacer. Este es un tema que, además, los propios funcionarios no tienen claro, porque he conversado con ellos y me manifestaron por escrito que entendían por esa expresión de no ser despedidos sino por ineptitud, omisión o delito, que no se los podía despedir por esas causales sin sumario. Entonces, les dije que si era así, que yo se los redactaba y que sin duda alguna lo aprobábamos. Que no puedan ser destituidos sin sumario, me parece bien. Entonces, se dieron cuenta de que algo pasaba y me dijeron que iban a consultar a sus abogados.

Reitero que esto va a contrapelo de todas las tendencias actuales, ya que hoy en día se pretende dejar sin efecto la inamovilidad de cualquier tipo de funcionario, mientras que acá se la instala.

Referido a los mismos empleados de la Caja, aspiramos a que las jubilaciones que los mismos puedan cobrar en su momento, no sean superiores a la mejor jubilación de un profesional universitario, por la sencilla razón de que la Institución no es para los funcionarios, sino para los profesionales. De manera de que se trata de que puedan cobrar lo que pueda percibir el mejor posicionado de los profesionales, pero no más que eso. No tiene por qué haber ningún privilegio en una Caja cuya filosofía es la de la solidaridad; la prueba está en que todos pagan lo mismo, y todos cobran lo mismo: los profesionales ricos y los profesionales pobres; los que tienen mucho dinero, y los que tienen poco.

**SEÑOR DE LEON.-** Simplemente para aclarar un aspecto. Muchas veces se dice que los jubilados de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios cobran menos que los de las Cajas Notarial y Bancaria, pero se trata de Institutos muy diferentes y no se pueden establecer comparaciones.

**SEÑOR HERBERT.-** El tercer tema importante para nosotros sabemos que corresponde a un acuerdo político y consiste en la posibilidad de que profesionales que no han aportado en su vida profesional a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se jubilen a través de la misma. Quisiera que se sepa que esto no puede ser aceptado por los profesionales que han contribuido a los fondos de la Caja basados en el principio de solidaridad, durante toda una vida de aportes de por lo menos treinta años.

Me refiero, concretamente, a los magistrados, un tema que nos toca muy de cerca porque ellos son amigos nuestros, pero aunque nos cueste mucho, por una cuestión de principios debemos decir que los magistrados se jubilan por el régimen del Banco de Previsión Social, es decir, el régimen común. Si se ha producido realmente una situación de injusticia con respecto a los magistrados, habrá que arreglarla en la vía correspondiente. Esto significa que habrá que exonerarlos del límite que se les ha

impuesto en ese Banco, pero no cargarlos a la Caja de Profesionales que entonces se constituiría en una especie de Caja residual a la cual otros profesionales que se jubilan por el sistema común del Banco de Previsión Social podrían aspirar a entrar.

El Colegio de Abogados, el Sindicato Médico del Uruguay y la Asociación de Médicos Veterinarios no hacen cuestión en cuanto a la generalidad del proyecto, pero plantean esos tres temas que son de principio. Además, hay pequeños detalles sobre los que no me quiero extender, que figuran en el repartido que dejamos a disposición de la Comisión, que tienen que ver con que, por ejemplo, se adopte el criterio general de que quien está en situación de jubilarse por un sistema u otro puede optar por el que más le conviene, o que se le aplique de oficio el sistema más beneficioso, tal como ocurre con el régimen general de las jubilaciones. Todos estos aspectos están incluidos en el proyecto.

Me gustaría, si es posible, que el doctor De León se extendiera algo más sobre el tema de los magistrados, puesto que ha mantenido reuniones al respecto con la Asociación de Magistrados.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** A los efectos de ordenar la versión taquigráfica, aclaro que la Comisión está recibiendo en forma conjunta al Colegio de Abogados, al Sindicato Médico del Uruguay y a la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay. En este momento expone el Colegio de Abogados y está en el uso de la palabra el doctor De León.

**SEÑOR DE LEÓN.-** Justamente hoy mantuvimos una reunión con los magistrados, en la que expusimos con sinceridad nuestra posición. Pensamos que aquí hay una cuestión de principios en materia previsional, porque no se puede dar una jubilación a quien no aportó. Si es justo que los jueces tengan una mejor jubilación, habría que buscar la vía por otro lado.

Por otra parte, en todo lo que tiene que ver con la Caja, así como en lo relativo a la movilidad de los funcionarios en relación al tema de los magistrados, quiero hacer hincapié en que la situación económica de la Caja Profesional es muy delicada. Hace un año –cuando no teníamos una situación como la que se vive hoy- se elaboró un estudio actuarial, gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Dirección de Estadísticas, donde, de los escenarios que se presentaban, sólo dos le daban vida más o menos prolongada a la Caja. Al decir "dos escenarios" me refiero al ingreso de nuevas profesiones y al cumplimiento de la palabra, es decir, el aumento de los aportes que cada vez se hace más difícil porque, como se ha dicho, cada vez hay más declaraciones de no ejercicio en la Caja. En consecuencia, nuestra institución está en rojo, pues se ha gastado también –según tengo entendido- parte del patrimonio y algunos bonos. Antes nos manejábamos sólo con los intereses, pero ahora eso se vuelve más difícil.

Debo aclarar que estas observaciones son absolutamente objetivas y claras. Por lo tanto, para cualquier tema, ya sea la inamovilidad de los funcionarios o que la Caja pudiera tener opción de achicar su presupuesto en ese sentido, aunque nadie quiere hacer eso, pero podría ocurrir eventualmente, nos oponemos terminantemente por razones doctrinarias a que quien no ha aportado se pueda jubilar por nuestra Caja. Decimos esto en virtud de que hay muchos otros profesionales que están con un régimen de full time que luego pueden pretender engancharse en una jubilación. La situación de nuestra institución no nos permite adoptar ninguna actitud generosa y debemos ser muy cuidadosos.

**SEÑORA BONINI.-** En general, sobre los aspectos que el Colegio de Abogados ha informado, desde 1987 se han presentado diversos proyectos de ley. Las últimas iniciativas se han visto motivadas por la Ley Nº 16.713, que obliga a una Comisión Especial y a la Caja a intervenir en un nuevo proyecto.

Se han ajustado distintos aspectos del régimen jubilatorio y pensionario y, en general, de la Ley Orgánica de la Caja. En lo relativo a la disposición relacionada con los funcionarios magistrados, jueces, fiscales, procuradores, ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ministros de la Suprema Corte de Justicia, debo decir que no fue incluida por ninguna de las Comisiones que intervinieron en las distintas redacciones de los proyectos. Siempre se excluyó a quienes no tenían el libre ejercicio profesional, tanto porque les fuera prohibido por la Constitución, como por leyes especiales. Tal es el caso de quienes ejercían con dedicación full time o de quienes estaban prohibidos directamente por la Constitución para ejercer cualquier otra actividad.

Por lo tanto, la incorporación no correspondió a la Caja de Profesionales ni a las Comisiones internas del Banco de Previsión Social; el capítulo de disposiciones especiales fue introducido por el Poder Ejecutivo. Allí se menciona a un determinado número de funcionarios aludidos en el artículo 147, que también están acotados a un período determinado. Me refiero a quienes desempeñaban funciones en esos cargos desde antes de 1996 y que tuvieran 40 o más años de edad.

¿Qué problema nos crea esta situación con respecto al resto de los profesionales y a lo que es la finalidad específica de la Caja de Profesionales, es decir, que sean beneficiarios los que tienen el ejercicio libre de la profesión? Creemos que los elementos claves del derecho jubilatorio, o sea, la aportación y la actividad, no aparecen en esta situación. No hay actividad en el ejercicio libre ni existe aporte directo o indirecto. El aporte directo no se da porque, por lo menos un grupo –quienes ya tengan configurados como servicios, lo que dentro de la función pública equivaldría al mismo del ejercicio profesional- tendría derecho a una jubilación común luego de los 60 años de edad, con 30 años de servicio. Entonces, durante ese período, este grupo, cuya pasividad va a ser servida por Rentas Generales, no ha aportado. No lo ha hecho al servicio de lo que va a ser su pasividad ni de lo que puede ser su pensión. Sin embargo, no está contemplado el servicio de cobertura de salud ni el de asistencia funeraria, y tampoco los puede cubrir nuestra institución ya que no ha recibido los aportes.

El tributo que recauda la Caja de Profesionales y que vierte al Estado es el Impuesto a las Retribuciones Personales: los sueldos y las jubilaciones. Por lo tanto, parte de lo que se nos descuenta por el Impuesto a las Retribuciones Personales, a nosotros como jubilados y a ellos como activos, se destina a compensar las pasividades que pueda percibir este grupo de funcionarios.

Además de los gastos por las coberturas de salud y expensas funerarias que tendría a su cargo la Caja, están los gastos administrativos que implican las liquidaciones de todo este grupo de funcionarios.

Otro aspecto que nos diferencia del régimen de los profesionales comunes es que a estos se les permite acumular las jubilaciones por incapacidad total con la del Banco de Previsión Social. En el proyecto de ley, la incapacidad total únicamente se le puede servir a un profesional cuando éste no tenga ninguna otra jubilación o retiro. Es decir que, según el inciso C) del artículo 65 aquí también existe un régimen discriminatorio. Se trataría de un reconocimiento graciable –por decirlo de alguna manera- de servicios y, por lo tanto, estamos hablando de una prestación de un servicio de seguridad social sin la correlación de aportes.

También existen algunos casos en los que tendríamos un grupo que ya estaría en condiciones de que su pasividad fuera servida por Rentas Generales y otro que todavía no reúne las condiciones para la jubilación común y, por lo tanto, Rentas Generales absorbería la parte correspondiente al período de ejercicio en la función pública hasta la fecha de la sanción de la ley y el resto estaría a cargo de la Caja, en este caso sí con el aporte correspondiente.

Lo que a nosotros nos ha impresionado es, en realidad, la incorporación de profesionales sin ejercicio libre, así como también la de aquellos que no conservan la igualdad –por decirlo de alguna manera- con el resto. En este sentido, no vamos a entrar a polemizar sobre el hecho de si es justa o no la situación de estos funcionarios que dedican su vida e ingresan a una tarea en la que cualquier otra actividad pública le es prohibida. Indudablemente, debemos apoyar la función jurisdiccional, pero no vemos que deba ser la Caja Profesional la que cubra ese déficit en el que se encuentran dichos funcionarios.

Por esa razón, a través de la Comisión Asesora y del Colegio de Abogados, hemos tenido que tratar de ver si estos funcionarios pueden conseguir otra forma de ampararse que no sea lesionando los intereses y los fondos, ya bastante estrechos, con los que se está desarrollando la propia Caja de Jubilaciones.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** A continuación, cedemos la palabra al representante del Sindicato Médico del Uruguay.

**SEÑOR TURNES.-** El Sindicato Médico del Uruguay apoya en un todo las expresiones que anteriormente pronunció el señor Presidente del Colegio de Abogados, doctor Herbert, por compartir los principios en que están fundadas.

Muchas gracias.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Corresponde darle la palabra a la delegada de la Asociación de Ingenieros Químicos.

**SEÑORA FERNANDEZ.-** Agradezco la invitación que se nos ha cursado.

Además de integrar la Directiva de la Asociación de Ingenieros Químicos, soy Presidenta de la Comisión Asesora y de Contralor razón por la cual mis colegas me propusieron que hablara en esta ocasión, porque estoy más interiorizada en el tema y conozco determinados detalles, pues he estado trabajando en la Caja desde 1997.

La Asociación de Ingenieros Químicos está de acuerdo con las grandes líneas y los temas básicos de este proyecto de ley; sin embargo, existe una serie de puntos que consideramos deben ser mejorados. Algunos de ellos ya han sido mencionados por los representantes del Colegio de Abogados como, por ejemplo, lo relativo al inciso C) del artículo 35 en donde, en realidad y según la interpretación que hacen los mismos abogados, se estaría dando la inamovilidad a los funcionarios. Nuestra Asociación considera que no es lógico que en un Instituto que justamente ampara a personas que lo que menos tienen es inamovilidad –hoy tenemos un trabajo y mañana no; hoy tenemos un cliente, pero no sabemos si en el futuro lo tendremos y en los períodos en los que no contamos con trabajo estamos consumiendo nuestros recursos- sus funcionarios gocen de un privilegio que es propio del pasado y no del presente.

Otro punto en el cual estamos de acuerdo y sobre el que no me voy a extender porque ya los abogados lo han analizado en forma extensa –incluso han aclarado varios de esos aspectos- es el relativo a nuestra posición con respecto a que los Magistrados puedan jubilarse por la Caja de Profesionales Universitarios. Leyendo la ley, en el artículo 42 se dice que están excluidos, pero al final se les incluye. De esa forma podrían jubilarse personas que no han ejercido libremente la profesión ni han realizado los aportes correspondientes. Repito que no me voy a extender en los fundamentos teóricos porque ya han sido expuestos.

Hay otro punto interesante, que es el relacionado con el presupuesto financiero y el plan de inversiones que hace la Caja. A nuestro entender, y por hechos que se han producido en el pasado, la Caja debería estar obligada por ley a efectuar estudios previos de viabilidad económico-financiera antes de llevar a cabo ningún tipo de emprendimiento, llámese construcción de edificios, forestación o cualquier otro emprendimiento productivo que la Caja desee realizar. Aclaro que no nos oponemos a que se realicen inversiones, sino a que se hagan sin un estudio de viabilidad económico-financiero. Al respecto, debo decir que todas las inversiones que ha realizado la Caja no han contado con ese estudio. Por eso nos gustaría que la Caja –voy a dejar a los señores Senadores un resumen de estos planteos- se viera obligada a efectuar un estudio de viabilidad económico-financiero antes de llevar a cabo cualquier tipo de inversión y que dicho estudio fuera aprobado por la Comisión Asesora de Contralor. Los ingenieros químicos, quizás por deformación profesional, no entendemos cómo alguien puede invertir dinero sin efectuar un análisis previo.

Otro aspecto que nos parece que debería modificarse es el relacionado con la jubilación por edad avanzada. Pensamos que no es justo que un profesional que ha estado aportando 15 años o más a la Caja de Profesionales -por haberse jubilado tarde y no llegar a generar su causal de 30 años de aportes y 60 de edad o porque en determinado momento no puede seguir aportando- pierda esos aportes si tiene otra jubilación. Como profesional, me siento mal si le saco dinero a alguien y no le doy nada a cambio.

En el proyecto original de la Caja se establecía que la jubilación por edad avanzada, que se logra a los 70 años de edad, era compatible con otra jubilación. Cuando el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto estableció que era incompatible con cualquier otra prestación de la seguridad social. Nos gustaría que esto fuera modificado porque, como profesionales, realmente nos parece que no es apropiado quedarnos con ese dinero que no es nuestro.

En este momento, entendemos que un organismo de previsión social debe ser manejado de la forma más eficaz y eficiente. Al respecto, consideramos pesado un Directorio con siete miembros. Creemos que debería empezarse por reformular el número de Directores, pasando de siete a cinco: tres por los activos, uno por los jubilados y otro por el Poder Ejecutivo, como contralor. Consideramos que esto sería dar una señal hacia la sociedad en el sentido de que las cosas se van haciendo por la vía correcta.

Por último, hay dos puntos más de poca significación que figuran, de todas maneras, en el material que les entregamos para que los señores Senadores los consideren a posteriori.

**SEÑOR HEBER.-** Hemos tomado nota de las observaciones que han hecho las distintas agremiaciones. La verdad es que no me había dado cuenta del literal c) del artículo 35; quizá no le presté atención durante la lectura. Por mirar tantas cosas del Estado, he cambiado un poco los criterios.

(Hilaridad)

Parecería no solamente de recibo esa disposición, sino también una contradicción con el artículo 34, que establece el régimen laboral. Lo digo en tono de comentario.

En cuanto a la Junta Asesora, advierto —estuve leyendo la disposición mientras se hacían las distintas exposiciones— que en el artículo 33 se habla de sus competencias. Se dice que la Comisión Asesora y de Contralor tendrá las atribuciones de controlar la gestión del Directorio. Una forma de hacerlo es controlar las inversiones que hace; de lo contrario, no sé qué tipo de contralor puede realizar. He tomado nota del tema y naturalmente vamos a analizarlo en la Comisión. Se dice: "a) Controlar la gestión del Directorio de acuerdo con la presente ley". Si se trata de controlar al Directorio, las inversiones que éste hace tienen especial relevancia. No creo que pueda interpretarse de otra manera; quizá tenga que decirlo la ley, que es otra cosa.

También es de recibo lo que decía uno de nuestros visitantes, en cuanto al capítulo de las inversiones, sobre el estudio de la viabilidad financiera. Parecería hasta de perogrullo incluirlo en el artículo de un proyecto de ley. Nadie supone que se pueda hacer una inversión que respalde jubilaciones sin hacerse previamente un estudio de viabilidad financiera. Me parece de correcto manejo de gestión y de asesoramiento. No pueden tomarse los argumentos de reserva. Podrá haber una colocación inmediata que convenga a la Caja si hay apuro para hacerla, pero no es de lo que se está hablando en materia de inversiones.

Simplemente quería hacer el comentario sobre el artículo 33 en lo que, a mi juicio, contempla el literal a), esto es, cuando se habla de controlar la gestión del Directorio de acuerdo con la presente ley. Esto está en el tema de las inversiones, por lo que el asunto está contemplado.

La otra pregunta que quiero hacer a los representantes de las asociaciones que nos visitan, la realizaré sin perjuicio de lo que ya hemos comentado, y tiene que ver con el artículo 34, que refiere al régimen de los funcionarios. No me resulta claro cómo se van a jubilar, porque se estaría estableciendo una categoría distinta de funcionarios. ¿Es algo nuevo? Digo esto porque son funcionarios administrativos, pero no iguales a los demás del universo. Hasta ahora están aportando al Banco de Previsión Social, pero según este proyecto de ley los estaríamos incluyendo en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Es más; se dice que la tasa de aportación se aplicará por sobre sus remuneraciones y será la vigente para los profesionales afiliados a la Caja, rigiendo en lo pertinente el artículo 58 de la ley cuyo número no recuerdo en este momento. Parecería que estuviéramos estableciendo una nueva categoría especial en donde se los relaciona con los profesionales. Simplemente, quiero escuchar un comentario sobre este asunto, porque no sólo aparece lo de la inamovilidad, sino también una nueva figura que, de alguna manera, nos lleva a reflexionar sobre los artículos 34, 35 y 36, que son normas sobre funcionarios privados pero que tienen excepciones a estos últimos y con regímenes jubilatorios también excepcionales. Entonces, nos preguntamos si no estaremos creando una injusticia con respecto al resto de los funcionarios privados del país, que mañana, quizá con derecho, puedan reclamarme a mí, como Legislador, por qué no los incluyo también en la Caja de Profesionales para tener así una jubilación especial.

Quizá esto no caiga bien, pero me extraña la situación porque, a medida que nos vamos internando en este proyecto de ley que estaba a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y que ahora, como miembros de la Comisión de Hacienda estamos conociendo, nos enteramos de algunas disposiciones que nos sorprenden y que nos llevan a preguntarnos cómo explicamos públicamente que debemos establecer categorías de especialidad a funciones que, de alguna manera, son iguales a las del resto de la sociedad. Confieso que me cuesta explicarlo, por lo que quisiera escuchar alguna opinión al respecto.

**SEÑOR HERBERT.-** La filosofía del sistema profesional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios está muy bien definida: se aporta por ficto, se aporta lo mismo durante tantos años por categoría y al final se cobra lo mismo. Esta filosofía puede ser discutible en términos teóricos, pero en realidad es un dato dado.

De manera que sobre esa base tenemos que manejar todo nuestro razonamiento. Ergo, los funcionarios de la Caja podrían optar por incorporarse al régimen de la Caja o por continuar en el régimen común del Banco de Previsión Social. Lo que no se puede hacer, precisamente, es formar un sistema mixto integrado por la masa de profesionales para la cual ha sido creado el sistema previsional —esto es, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios— y que tiene un régimen, y un pequeño grupo de personas que no son las principales destinatarias de los beneficios de la Caja, sino que se incorporan por razones excepcionales con otro sistema. Esto no puede ser. Si quieren entrar al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios deben aportar por fictos y se van a jubilar por fictos. No veo otra alternativa, porque el régimen filosófico de la Caja es tan intenso, tan duro, que honestamente no admite excepciones; si lo hacemos, "vamos fritos".

**SEÑOR HEBER.-** Simplemente, quería hacer una pregunta, porque voy pensando a medida que se está reflexionando. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre un funcionario que trabaja administrativamente en una clínica y otro que realiza tareas administrativas en la Caja de Profesionales? Según el planteo que se ha hecho, vamos a tener que cambiar el nombre a la Caja y llamarla "Caja de Profesionales y afines". Esta sería la única manera de poder contemplar a los funcionarios.

**SEÑORA BONINI.-** Los funcionarios y empleados de los profesionales, e incluso los que trabajan en la educación universitaria, estaban incorporados en la ley de creación de la Caja. Luego, por distintas razones, en el año 1961 ó 1964 —no recuerdo bien— se los excluyó y se los incorporó al Banco de Previsión Social. Sin embargo, continuaron en la otra situación los funcionarios de las Caja Notarial y Bancaria. Hay que tomar en cuenta que los empleados de la Caja Notarial, e incluso los de las escribanías, también están comprendidos dentro de la Caja Notarial. Estas disposiciones ya fueron aprobadas e integran la actual Ley Orgánica de la Caja Notarial, recientemente aprobada.

La mezcla nos provocaba cierta resistencia, sobre todo en cuanto a la incorporación de los funcionarios. En general, los Directorios pasan, y son los funcionarios los que realmente manejan el quid de la Caja de Profesionales Universitarios.

En lo que respecta a sus aportes, quiero decir que ellos aportan sobre sus remuneraciones reales. En ese aspecto, la Caja gana porque no aportan sobre fictos; es decir que de \$ 90.000 —que es el sueldo del gerente— para abajo, se aporta sobre remuneraciones reales. Si se toman todos los años de aportes, se puede producir un fondo mayor que el que se generaría únicamente por las jubilaciones.

Por otra parte, ellos han tenido un beneficio en cuanto al tope, porque no van a estar sujetos al tope común que tendrían como jubilados del Banco de Previsión Social. De modo que van a tener derecho a la máxima jubilación que pudiera corresponderle al profesional con la mayor liquidación jubilatoria. Esa es la situación que surge y que se introdujo en la ley. Incluso podrían llegar a tener un poco más que el jubilado profesional. El 82,5% sería el porcentaje que obtendría el profesional sobre el ficto, pero los funcionarios, sobre una remuneración mayor, tendrían el máximo de dicho monto. Es decir que ahí tendrían una ventaja. Por ejemplo, si ahora lo máximo que se puede obtener como jubilación profesional son \$15.000 y el ficto es de \$19.000, ellos podrían llegar a tener una jubilación de \$ 19.000 en lugar de \$ 15.000, que es lo que tiene cualquier profesional con el máximo de servicios.

En lo que tiene que ver con la Comisión Asesora, aclaro que posee la competencia genérica establecida en el artículo 32. Luego, en el artículo 72 se hace referencia al procedimiento que se seguirá en materia de inversiones. En este sentido, hay inversiones en las cuales sería conveniente la intervención de la Comisión Asesora y, por otro lado, se aprueban aquellas que tienen un determinado número de votos del Directorio; en estos casos, no alcanza con la aprobación ficta ni expresa de la Comisión Asesora. En ese sentido, en los literales c), d) y al principio del artículo 72 entendíamos que debe intervenir la Comisión Asesora.

**SEÑORA FERNANDEZ.-** En realidad, la aclaración con respecto al tema de los funcionarios ya fue dada por la doctora Bonini. Entonces, no voy a reiterar ese aspecto. Sólo quería explicar que era por extensión de lo que sucedía en las otras dos Cajas paraestatales que se había aceptado esto a nivel de las distintas gremiales, con algunas excepciones. Digo esto porque hay gremiales que se oponen a que los funcionarios de la Caja se acojan al régimen jubilatorio de la Caja de Profesionales.

**SEÑOR DE LEON.-** En cuanto a la pregunta que formuló el señor Senador Heber, quiero decir lo siguiente. El contralor que aquí aparece es como el que ejerce el Tribunal de Cuentas; después que están hechas las cosas, no hay arreglo. El contralor ya estaba en la ley anterior, pero en los términos en que se fija en este proyecto de ley, no sirve. Es sabido que en cuanto a las inversiones, hubo profundas discrepancias. Por ejemplo, cuando empezaron las inversiones de forestación, ni siquiera la ley permitía que se vendiera la madera para la Caja de Profesionales. Cuando vinieron a mi departamento, en primer lugar sacaron las cuentas por arriba y no se veía claramente cuál era la ganancia. Después dijeron que la ganancia real estaba en vender en cuotas, lo cual significaba, más que nada, un negocio financiero.

Personalmente, tengo conocimiento sobre estos temas porque intervine en jornadas sobre forestación. Al respecto, puedo decir que un plan de forestación debe tener buenas vías y acceso a los puntos de embarque. Sin embargo, los que conocemos están lejos de las vías de acceso, pero cerca de los puntos de embarque.

Entonces, en estos temas debemos tener una actividad preventiva e intervenir antes de hacer las inversiones, discutiéndolas más públicamente.

Por su parte, en la Comisión Asesora están representadas todas las profesiones, lo que da una cierta garantía de objetividad.

De modo que no queremos intervenir cuando está todo el pescado vendido sino cuando tenemos tiempo de corregir o de prevenir este tipo de inversiones. Vamos a entendernos; yo trato de ser leal en todos los temas que discuto. Hoy la Caja de Profesionales tiene U\$S 4.000.000 en el "corralito", entre el Banco de la República y el Banco de Crédito. No queremos decir que haya habido mala fe de parte del Directorio ni una equivocación a sabiendas, sino que simplemente discrepamos con las inversiones que se hicieron, por no haber seguido los métodos pertinentes. Después nos damos contra las paredes; hablamos, decimos, pero las inversiones están ahí. Entonces, queremos que la Comisión Asesora tenga la facultad de controlar.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** A los efectos de aclarar estos aspectos a los señores Senadores que luego lean la versión taquigráfica, quiero decir que aquí hay cuatro temas gruesos, más allá de que pueda haber una serie de detalles.

Uno de esos temas es cómo vienen constituidos los empleados; otro, el de las pensiones que son incompatibles en la medida en que el profesional, en algunas circunstancias se recibe tarde y a veces no completa sus años. Entonces, si se le prohíbe sumar las jubilaciones, probablemente trate de evadir sus obligaciones. Por un lado está la situación de la expropiación y, por otro, el hecho de que si sabe que le van a hacer la expropiación, lo que va a hacer es tratar de no aportar.

Otro punto importante es la situación de los Magistrados, lo cual ya había sido referido en la sesión anterior.

Por último, está lo que tiene que ver con las inversiones y los controles antes de hacerlas, sobre todo, cuando son de montos importantes.

**SEÑOR BRAUSE.-** El señor Presidente ha sintetizado en forma ajustada los cuatro temas abordados. No obstante, quisiera incorporar otro punto que no deja de tener su importancia a la hora de determinar la obligación de realizar los aportes a la Caja de Profesionales, o eventualmente, a otro régimen de seguridad social.

La norma que se proyecta es muy clara en cuanto a que la actividad profesional que está amparada comprende aquella personal y obligatoriamente sujeta al régimen establecido en la presente Ley; así lo dice expresamente el artículo 43. Es claro que esto es así, cuando se ejerce la profesión en forma independiente y personal. Sin embargo, cuando los profesionales se reúnen en alguna forma organizada para prestar servicios profesionales a terceros, hay interpretaciones que llevan a pensar que en ese caso no estamos en el ejercicio personal independiente de la profesión, sino que estaríamos dentro de una relación de dependencia. El tema no es fácil por cuanto en la práctica, como todos sabemos, en las distintas profesiones –no querría nombrar ninguna en particular- la experiencia me enseña que hay muestras de esta forma práctica de ejercer. Quisiera saber, cuando se da esa hipótesis de profesionales que se organizan para prestar servicios a terceros, cuál sería la interpretación correcta respecto a esta Ley. A mi entender, el artículo 43 de la norma proyectada que modifica el inciso primero de la iniciativa original, estaría dando una respuesta a mi interrogante, pero me gustaría saber la opinión de la delegación que nos visita.

Reitero que cuando la profesión se ejerce personal e independientemente no existen inconvenientes. Sin embargo, el problema se plantea cuando los profesionales se organizan para prestarle servicios a terceros. Me gustaría saber si la relación interna entre el profesional y esa organización está alcanzada por esta iniciativa o no. Aclaro que tengo una opinión al respecto, pero quisiera conocer la de ustedes.

**SEÑORA BONINI.-** Este problema lo han planteado los propios profesionales a la Caja, pero también lo han hecho en el Banco de Previsión Social. No debemos olvidar que la Ley N° 16.713 considera que se trata de una actividad empresarial y que, por lo tanto, se debe aportar al Banco de Previsión Social. A su vez, la Caja de Profesionales entiende que, aún incluidos dentro de esas sociedades o distintas formas de agremiaciones, también están haciendo ejercicio de la profesión. Al parecer habría una contraposición o, en todo caso, dos interpretaciones o aplicaciones distintas de la Ley N° 16.713 en lo que es la afiliación al Banco de Previsión Social y actividad amparada por este Organismo, y el libre ejercicio de la profesión de acuerdo a lo que establece el artículo 43. Esta situación ha sido planteada por contadores y abogados e, inclusive, en el seno del Directorio del Colegio de Abogados, por cuanto tienen la doble condición de afiliados y, por lo tanto, aportan a las dos instituciones. En todo caso, habría que determinar cuál de las dos situaciones es la que debe primar. Insisto en que hay dos textos: por un lado, el que refiere a la afiliación a la Caja de Profesionales y, por otro, el que tiene que ver con el Banco de Previsión Social. Cabe aclarar que esta discusión viene desde hace años, prácticamente, de toda la vida, o sea, desde la creación de la Caja de Industrias se ha entendido que el profesional que tiene su empresa y que tiene empleados, es patrón; si a su vez es un profesional, tiene que estar afiliado a la Caja de Profesionales. Podría decirse que es un problema de competencia y de determinación de esa doble afiliación que tienen algunos profesionales en esas nuevas formas que se han ido creando últimamente.

**SEÑOR HERBERT.-** Cuando el tema se planteó en el Colegio de Abogados, no pudimos llegar a un acuerdo o a una solución. Aclaro que me voy a referir a los profesionales abogados porque es el área que conozco. A este respecto, cabe señalar que los jóvenes profesionales a veces son contratados por Estudios grandes y, obviamente, de acuerdo al criterio del Banco de Previsión Social, deberían tributar a ese Organismo. Pero sucede que desde la perspectiva del profesional joven, esta situación suele ser transitoria o de alguna manera reversible por su voluntad. Dicho de otro modo, en cualquier momento podría decidir que no le conviene este sistema y pasa a ejercer libremente su profesión. También puede suceder que progrese en sus conocimientos y pase del mismo modo a ejercer libremente la profesión. Si al día siguiente no le va tan bien en esa condición, podría recuperar su puesto si aún contara con el ofrecimiento. Todo esto hace que la situación sea insostenible. Es una cuestión política en la que debe decidir el Parlamento que debe elegir un sistema. En mi opinión, el más sencillo es que se siga aportando a la Caja de Profesionales, porque es el sistema que cubre todo. De esta manera, el profesional que se recibe puede actuar en un régimen de dependencia durante cinco años, en un régimen libre durante tres años y nuevamente en un régimen de dependencia durante un año. Seguramente, hacia el final de su carrera, actuará otra vez libremente.

**SEÑOR HEBER.-** Creo que la pregunta que ha planteado el señor Senador Brause es excelente y refleja una vieja discusión que tenemos en el Parlamento. En lo que me es personal me resulta muy claro, sobre todo, cuando llega un proyecto por el cual se estaría jubilando a personas que no son profesionales por la Caja de Profesionales, parecería una incongruencia que profesionales que aunque sean dependientes ejercen su profesión, no aporten a la misma. No hay duda de que tienen que regirse por la Caja de Profesionales y no por el Banco de Previsión Social. Lo que tenemos que detener ya es la doble aportación, porque eso hasta parece una penalización al trabajo.

Tenemos que decir que el aporte se hace a una o a otra Caja; personalmente creo que en todos los casos tiene que hacerse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, porque no solamente la fortalecemos, sino porque además la persona está ejerciendo la profesión, aunque sea en relación de dependencia. No importa este tema; no veo cuál es el argumento jurídico para que la relación de dependencia pueda negar el ejercicio profesional, contratado como tal. Por otra parte, debemos tener en cuenta que en la Caja hay gente que no es profesional; por lo tanto, con más razón tienen que estar los que sí lo son.

**SEÑORA BONINI.-** Deseo aclarar que en la Ley N° 16.713 se establece que el Banco de Previsión Social debe hacer el estudio de los diferentes contratos que realizan los profesionales a través de arrendamiento de servicios o de obra, para ver si en realidad se trata de una subordinación o de un ejercicio libre de la profesión. Inclusive, a este respecto hay sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El problema más importante que se ha planteado es en torno a si en realidad los médicos están ejerciendo libremente o lo hacen en relación de un contrato subordinado puesto que tienen que atenerse a todas las condiciones de un empleado común.

El hecho de estar incluidos en el Banco de Previsión Social, a algunos profesionales les da una serie de ventajas en cuanto a que pueden hacer un aporte menor, a veces doble. La cuestión es que declaran ejercicio subordinado y no pagan en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, con lo cual tenemos un retaceo de recursos. A su vez, esos profesionales se ven beneficiados en su carácter de subordinados con relación al seguro de paro y de desempleo, y en lo que tiene que ver con las discapacidades.

Entonces, hay que sopesar mucho esta situación habida cuenta que con la gran desocupación existente y en virtud de la situación en que se encuentra el profesional, puede ocasionar un impacto bastante importante. En consecuencia, este es un punto que quizá por ahora convendría dejarlo como está, para resolverlo más adelante teniendo en cuenta todas las posiciones. Inclusive, dado lo que establece la Ley N° 16.713, estoy segura de que va a haber oposición del Banco de Previsión Social porque, como dije, hay sentencias al respecto y también dictámenes jurídicos de su propia Sala de Abogados.

**SEÑOR DE LEÓN.-** Lo que queremos solicitar a la hora de que se analicen todos estos puntos es que se tenga en cuenta que el Estado no responde por las obligaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Tenemos, por ejemplo, el caso de los Magistrados y del IRP, que no sabemos si algún día lo dejarán de aportar. Nosotros podríamos decir que no tenemos recursos para pagarles porque Rentas Generales no los virtió.

En consecuencia, el punto más sensible es la parte económica. La ley aclara bien que el Estado no responde por la Caja. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es manejo de dinero, gastos y compromisos, y no dejar ninguna puerta abierta ante compromisos adicionales que sólo la Caja tendrá que enfrentar con los menguados recursos fruto del aporte de los profesionales que, como dije hoy, cada vez hacen llegar más declaraciones de no ejercicio.

**SEÑOR BRAUSE.-** El doctor Ronald Herbert ha contestado de manera muy convincente la cuestión que yo planteé. Por lo tanto, con respecto a cuál es la actividad profesional amparada, en donde por lo que señalan nuestros visitantes existe disparidad de criterios entre el Banco de Previsión Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios –o por lo menos con los profesionales en algunas situaciones- sería interesante que el Colegio de Abogados del Uruguay, representado aquí por su Presidente, nos hiciera un aporte en esa materia, puesto que para poder resolverla deberíamos aclararla en la ley.

Por consiguiente, pediría al doctor Herbert –naturalmente, si fuera posible- que dijera si en el artículo 43, como viene redactado en esta iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo con fecha 15 de agosto de este año y que modifica la redacción original del proyecto de ley, está dada claramente la respuesta al problema y que, en caso negativo, nos sugiera una redacción alternativa que comprenda la solución que el mismo nos adelantara. Naturalmente que no le estamos pidiendo una propuesta ahora, sino que simplemente quiero dejar planteada la inquietud.

**SEÑOR HERBERT.-** Sí se puede hacer, pero téngase en cuenta que mi perspectiva es la de una sola de las profesiones. De manera que esto no se puede hacer rápidamente, ya que tendría que ser llevado a conocimiento de otras, en tanto que podría existir una situación diferente con respecto, por ejemplo, a los médicos, a los químicos o a los ingenieros agrónomos. Entonces, sólo aclaro que mi perspectiva es parcial y que me voy a esforzar lo máximo posible para auscultar la opinión de todos los Colegios y Asociaciones Profesionales a los efectos de llegar a un consenso, si es que puedo.

**SEÑOR PRESIDENTE.-** Quiero dejar constancia de que en los temas que en su momento resumimos eran "periféricos" –lo digo entre comillas- de la ley, y que este que estamos tratando es medular. Entonces, no sea cosa que por redactarlo bien, no salga nada. Sabemos que en este momento hay puntos delicados de la ecuación de la Caja que este proyecto de ley mejora con creces, entre ellos, la posibilidad de incorporar profesiones, lo que hasta ahora no era posible.

Agradecemos la presencia del Colegio de Abogados, del Sindicato Médico del Uruguay y de la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay, esperamos los aportes que los señores Senadores han pedido a algunos de los visitantes y, por supuesto, estamos a las órdenes para cualquier otra inquietud que quieran hacer llegar.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18 y 53 minutos.)